Un juez dictamina que la lista de vigilancia por terrorismo del Gobierno de EE.UU. viola derechos

05/09/2019

Un juez federal ha dictaminado este miércoles que la base de datos del Gobierno de EE.UU. que recopila información sobre personas consideradas "terroristas conocidos o sospechosos" viola los derechos de los ciudadanos incluidos en ella, informó este miércoles The New York Times.

Según el medio estadounidense, desde 2017 alrededor de 1,2 millones de personas forman parte de esta lista de vigilancia en posesión del centro de detección de terroristas del FBI. Si bien la mayor parte de los nombres corresponde a personas que viven en el extranjero, 4.600 son ciudadanos estadounidenses.

Entre ellos, figura un grupo de 19 nacionales representado por el Consejo de relaciones estadounidenses-islámicas, que presentó una demanda argumentando que su inclusión en la lista viola sus derechos y que no se les comunicó por qué fueron añadidos en ella. Asimismo, aseguran que en el pasado fueron detenidos y hostigados al intentar entrar en el país.

Riesgo para la libertad

Estar en la lista de vigilancia puede conllevar restricciones a la hora de viajar o entrar en el país, así como mayores controles en los aeropuertos y por parte de la Policía, o no tener acceso a beneficios y/o contratos gubernamentales.

El juez Anthony J. Trenga admitió que los procedimientos actuales son inadecuados para proteger sus derechos constitucionales y cuestionó la constitucionalidad de la herramienta empleada por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional para detectar posibles terroristas. En opinión de Trenga, el criterio para incluir a alguien en la base de datos es demasiado impreciso. "El riesgo de privación errónea de los intereses de libertad de reputación es alto", explicó el juez.

Trenga asegura que la lista se compartió con la Policía a todos los niveles, lo que aumenta el riesgo de que las personas que figuran en ella "estén rodeadas por la Policía, esposadas frente a sus familias y detenidas durante muchas horas".

El uso por parte del Gobierno de listas de vigilancia del terrorismo aumentó de manera considerable desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Su falta de transparencia en cuanto a los criterios de inclusión de gente se encuentra en el punto de mira de la sociedad estadounidense.